

770-771 y U.7882772) e insertará en la «Colección Legislativa» definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1965.

Lo que comunico a V. I. a los efectos oportunos
Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 15 de noviembre de 1967.—P. D., el Subsecretario Blas Tello y Fernández-Caballero.

Ilmo. Sr. Director Gerente de Urbanización.

ORDEN de 15 de noviembre de 1967 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Benjamín Martínez contra Orden de 7 de noviembre de 1960.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo interpuesto por don Benjamín Martínez Vizcaino y otros, demandantes, la Administración General, demandada, contra la Orden de este Ministerio de 7 de noviembre de 1960 sobre expropiación de las parcelas números 5, 12, 17, sitas en el polígono «San Pablo», se ha dictado, con fecha 22 de junio de 1967, sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos declarar y declaramos la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo número 6.968 interpuesto por don Francisco Marín Ramos (hoy sus herederos) contra la Orden del Ministerio de la Vivienda fecha 21 de junio de 1961, desestimatoria del recurso de reposición promovido por aquél frente a resolución de 7 de noviembre de 1960 que justipreció la finca número 5 del polígono de expropiación «San Pablo», de Sevilla; y que estimando parcialmente los recursos números 6.911, referente a la finca número 12, y 6.971, relativa a la finca número 17 de igual polígono, debemos declarar y declaramos la nulidad en parte por no conformes a derecho de las dos resoluciones del Ministerio de la Vivienda antes consignadas, en lo que afectan a las dos fincas referidas, mandando que se efectúe nuevo justiprecio de ambas fincas con las modificaciones sobre el anterior que se deriven de señalar a la finca número 12 categoría «C», grado 1, en cuanto a la totalidad de los terrenos que la componen, con la consiguiente repercusión en los demás factores del justiprecio, añadiendo al importe que resulte el valor de las construcciones, ascendente a doscientas treinta y dos mil setecientos ochenta y siete pesetas cincuenta céntimos, más otras setecientas sesenta y nueve mil setecientos doce pesetas cincuenta céntimos por el concepto de indemnizaciones correspondientes a la ocupación verificada e incrementado el justiprecio con el cinco por ciento de afección de los bienes y con el interés legal de la totalidad desde el día siguiente a la ocupación hasta que tenga lugar el pago, así como con las modificaciones que se deriven de señalar, también a la finca número 17 igual categoría «C» y grado 1 para todos los terrenos con la misma repercusión en el justiprecio y sumando doscientas treinta y cuatro mil cuatrocientas cincuenta pesetas por el valor del suelo, treinta y cinco mil pesetas por el valor de las construcciones y treinta y seis mil ciento setenta y seis pesetas noventa y cinco céntimos por el concepto de indemnizaciones, con el incremento mismo del cinco por ciento de afección de los bienes y con el interés legal del justiprecio desde el siguiente día al de la ocupación hasta que se haga el pago, debiendo, en su día, practicarse la oportuna liquidación de intereses y depósitos en ambos casos; y que debemos absolver y absolvemos a la Administración de las dos demandas referenciadas en lo que exceden de las anteriores concesiones, en relación con lo cual quedarán firmes y subsistentes las resoluciones recurridas como ajustadas a derecho; todo ello sin hacer especial imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» e insertará en la «Colección Legislativa», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios términos la referida sentencia, publicándose el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado», todo ello en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1965.

Lo que comunico a V. I. a los efectos oportunos.
Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 15 de noviembre de 1967.—P. D., el Subsecretario Blas Tello y Fernández-Caballero.

Ilmo. Sr. Director Gerente de Urbanización.

ORDEN de 17 de noviembre de 1967 por la que se descalifican las viviendas de renta limitada, 1 grupo, sitas en Pozuelo de Alarcón (Madrid), al sitio de «Las Columnas», de don Maximino Gutiérrez Cuesta; la sita en la colonia «La Cabaña», de don Juan García Serrano, y la sita en el lugar «Del Manzorro o Piste», de don Cayetano Muñoz Pérez.

Ilmo. Sr.: Vistos los expedientes S-I-197/56, S-I-233/59 y S-I-2383/61, de Renta Limitada, primer grupo, del Instituto Nacional de la Vivienda, en orden a las descalificaciones de las viviendas sitas en término de Pozuelo de Alarcón (Madrid), al sitio de «Las Columnas», de don Maximino Gutiérrez Cuesta; la sita en la colonia «La Cabaña», de don Juan García Serrano, y la sita en el lugar «Del Manzorro o Piste», de don Cayetano Muñoz Pérez;

Visto el Decreto 1443/1965, de 3 de junio, especialmente sus artículos tercero y quinto, la Ley de 15 de julio de 1954 sobre protección de Viviendas de Renta Limitada, el Reglamento de 24 de junio de 1955 para su aplicación.

Este Ministerio ha dispuesto descalificar la vivienda de renta limitada, primer grupo, sita en Pozuelo de Alarcón, al sitio de «Las Columnas», solicitada por don Maximino Gutiérrez Cuesta, quien deberá dar cumplimiento a las obligaciones que determina el artículo 98 del Reglamento de 24 de junio de 1955; la vivienda de renta limitada, primer grupo, sita en Pozuelo de Alarcón (Madrid), en la colonia «La Cabaña», de dicha localidad, solicitada por don Juan García Serrano, quien deberá dar cumplimiento a las obligaciones que determina el artículo 98 del Reglamento de 24 de junio de 1955, y la vivienda de renta limitada, primer grupo, sita en Pozuelo de Alarcón (Madrid), al sitio «Del Manzorro o Piste», solicitada por don Cayetano Muñoz Pérez quien deberá dar cumplimiento a las obligaciones que determina el artículo 98 del Reglamento de 24 de junio de 1955.

De las presentes Ordenes se dará traslado a los interesados y Organismos oficiales en la parte que a cada uno les afectare.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 17 de noviembre de 1967.

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de la Vivienda.

ORDEN de 22 de noviembre de 1967 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo con fecha 27 de junio de 1967

Ilmo. Sr.: La Sala Cuarta del Tribunal Supremo en el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia entre don Manuel Guerrero de Castro, demandante, representado por el Procurador señor Sorribes Torrè y defendido por sí mismo, y la Administración General del Estado, demandada, y en su nombre su representante legal, contra Resolución del Ministerio de la Vivienda de 23 de noviembre de 1964, sobre nombramiento de Presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona a don José Ribas Seva, que actúa como coadyuvante, ha dictado con fecha 27 de junio de 1967 sentencia, cuya parte dispositiva se transcribe a continuación:

«Fallamos: Que con estimación del recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel Guerrero de Castro contra la resolución del Ministerio de la Vivienda de 23 de noviembre de 1964, sobre nombramiento de Presidente de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Barcelona a favor de don José Ribas Seva, debemos declarar como declaramos la nulidad de la resolución recurrida, así como la Orden de dicho Ministerio de 9 de junio del mismo año, que contiene el expresado nombramiento, por no estar ajustados a derecho; sin hacer especial declaración sobre costas.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y firmamos.—Ambrosio López.—Juan Becerril.—Pedro Fernández.—Luis Bermúdez.—José Samuel Roberes. (Rubricados.)

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia en el día de su fecha por el excelentísimo señor don José Samuel Roberes García, Magistrado Ponente en estos autos, celebrando audiencia pública la Sala Cuarta de lo Contencioso-administrativo, de lo que, como Secretario, certifico.—Madrid, 27 de junio de 1967.—Firmado: Luciano Corujo (rubricado).»

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ha dispuesto se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que participo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 22 de noviembre de 1967.

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA

Ilmo. Sr. Director general de la Vivienda.